

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, treinta (30) de noviembre de dos mil veinte (2020).

AUTO INTERLOCUTORIO

MAGISTRADO PONENTE: JHON ERICK CHAVES BRAVO

ACCIÓN:	EJECUTIVO
EXPEDIENTE:	76111-33-33-003-2019-00100-01
EJECUTANTE:	JULIO CÉSAR DE LA ROSA HERNÁNDEZ
EJECUTADO:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
ASUNTO	<b>APELACIÓN DE AUTO – RECHAZA DEMANDA–REVOCAR</b>

I. OBJETO DE LA DECISION

Procede el Despacho a decidir el recurso de apelación, propuesto por la parte ejecutante, contra el auto interlocutorio nro. 767 del 5 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga, que dispuso el rechazo de la demanda.

II. ANTECEDENTES

El señor JULIO CÉSAR DE LA ROSA HERNÁNDEZ, a través de apoderada judicial, presentó demanda ejecutiva contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, en el cual solicitó se libre mandamiento de pago a su favor por la suma de \$16.690.056,46, por concepto de capital insoluto, correspondiente a intereses moratorios, derivado de lo ordenado pagar a través de la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2013, emanada del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Buga, confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 11 de mayo de 2015 <sup>1</sup>.

Mediante auto interlocutorio nro. 590 del 13 de junio de 2019<sup>2</sup>, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Guadalajara de Buga dispuso inadmitir la demanda, por cuanto la sentencia objeto de ejecución fue aportada en copia simple, no se anexó documento alguno conforme al cual se pudiera constatar qué valores fueron cancelados a la parte demandada y la parte actora rebasó el plazo establecido en el artículo 192 del CPACA<sup>3</sup>, hecho que generó la suspensión de la causación de intereses.

<sup>1</sup> folios 1-9.

<sup>2</sup> folio 52.

<sup>3</sup> “Cumplidos tres (3) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide un condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, cesará la causación de intereses desde entonces hasta cuando se presente la solicitud”.

A través de memorial radicado en el Juzgado el 26 de junio de 2019<sup>4</sup>, la apoderada judicial de la parte demandante señaló que para efecto de librar el mandamiento de pago no es necesario allegar la copia auténtica de la sentencia con la respectiva constancia de notificación y ejecutoria, comoquiera que este documento se encuentra dentro del proceso ordinario. Adicionalmente, manifestó que a folio 52 del expediente obra copia de la Resolución nro. SFO 00795 del 27 de marzo de 2018, mediante la cual la entidad accionada dispuso el pago de \$64.500.022.68 a favor del accionante, por concepto de intereses moratorios derivados de la sentencia objeto de ejecución; que, sin embargo, aún se adeuda la suma de \$16.690.056,46.

Finalmente, adujo que la providencia objeto de ejecución fue dictada bajo el amparo del Decreto 01 de 1984 y, por consiguiente, en aplicación del artículo 177, inciso 6, ibídem<sup>5</sup>, la petición de cumplimiento de la sentencia se radicó dentro del término legal, el 29 de marzo de 2016.

### III. DE LA PROVIDENCIA APELADA:

Mediante auto interlocutorio nro. 767 del 5 de agosto de 2019<sup>6</sup>, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga rechazó la demanda bajo los siguientes argumentos:

Primeramente, señaló que fue el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Buga quien adelantó el proceso ordinario que dio lugar a la sentencia objeto de ejecución y, en consecuencia, conforme a las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011 debió aportar con la demanda copia auténtica de la providencia cuyo cumplimiento parcial deprecia, con su respectiva constancia de ejecutoria.

En segundo lugar, luego de analizar la liquidación con sustento en la que la parte actora pretende el cumplimiento del saldo insoluto, adujo lo siguiente:

*“Pero si la mesada pensional fue incrementada anualmente de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del año inmediatamente anterior, salvo algunos años en los que hay unas pequeñas diferencias en favor o en contra del pensionado, no hay razón para que al capital pagado (\$134.770.745.56) se le adicione la indexación mes a mes de la mesada pensional desde marzo de 2004 y sobre el total se liquiden intereses moratorios.  
(...)”*

*Es evidente que los intereses moratorios ya incluyen la indexación según lo visto, lo que lleva a considerar que ello es así siempre que se ordene el pago de intereses moratorios, ya que si solicita u ordena la indexación y no el pago de estos réditos, el resultado sería menor, en tanto los intereses moratorios, como se dijo, sí contienen la indexación”.*

---

<sup>4</sup> folios 53-56.

<sup>5</sup> “Cumplidos seis (6) meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”.

<sup>6</sup> folios 73-76.

#### **IV. FUNDAMENTOS DEL RECURSO:**

La apoderada judicial de la parte demandante manifestó su inconformidad frente al auto que dispuso el rechazo de la demanda, por considerar que, en el presente caso, el proceso ejecutivo se inició a continuación del proceso ordinario y, en consecuencia, no podía exigir el juzgador que se aportara copia auténtica de la sentencia objeto de ejecución.

Explicó que, aunque la sentencia fue conocida y dictada por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Buga, las funciones de ese despacho fueron asumidas de manera permanente por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Buga; razón por la cual el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que dio lugar a la sentencia objeto de ejecución se encuentra en ese despacho y lo convierte en el competente para conocer de esta demanda.

#### **V. CONSIDERACIONES:**

##### **5.1. PROBLEMA JURÍDICO**

El asunto que se discute se contrae a establecer si, cuando se pretende la ejecución de una sentencia proferida por esta jurisdicción, para la procedencia del mandamiento de pago es necesario que la parte actora aporte copia auténtica de la respectiva providencia con su constancia de ejecutoria.

##### **5.2. TESIS**

Se revocará la decisión de primera instancia, por cuanto, cuando se pretende la ejecución de una sentencia ante esta jurisdicción, no hace parte de los requisitos formales de la procedencia del mandamiento de pago la presentación de copia auténtica de la providencia objeto de ejecución. así mismo, no es de recibo la exigencia de requisitos adicionales a la copia de la sentencia.

##### **5.3. MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL**

##### **▪ DEL PROCESO EJECUTIVO Y EL TÍTULO EJECUTIVO EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA – REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL:**

La Ley 1437 de 2011 no regula de manera integral el trámite del proceso ejecutivo en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, es necesario remitirse al Código General del Proceso y aplicar de manera armónica ambos estatutos procesales, tal y como se explica a continuación.

El artículo 297 CPACA<sup>7</sup> establece que son títulos ejecutivos: **(i)** las sentencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo que condenen a una

<sup>7</sup> Artículo 297. Título Ejecutivo. Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias.
2. Las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que las entidades públicas queden obligadas al pago de sumas de dinero en forma clara, expresa y exigible.
3. Sin perjuicio de la prerrogativa del cobro coactivo que corresponde a los organismos y entidades públicas, prestarán mérito ejecutivo los contratos, los documentos en que consten sus garantías, junto con el acto administrativo a través del cual se declare su incumplimiento, el acta de liquidación del contrato, o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, en los que consten obligaciones claras, expresas y exigibles, a cargo de las partes intervinientes en tales actuaciones.

entidad pública al pago de sumas de dinero; **(ii)** las decisiones en firme proferidas en desarrollo de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en las que una entidad pública quede obligada al pago de sumas de dinero; **(iii)** el contrato estatal, el acta de liquidación, los documentos en que consten las garantías del contrato —que deberán estar acompañados del acto administrativo que declare el incumplimiento contractual— o cualquier acto proferido con ocasión de la actividad contractual, y **(iv)** las copias auténticas de los actos administrativos que reconozcan un derecho o admitan la existencia de una obligación.

A su vez, el artículo 422 del CGP<sup>8</sup> establece que son títulos ejecutivos las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en:

- (i) un documento que provenga del deudor o de su causante;
- (ii) una sentencia condenatoria o cualquier otra providencia judicial;
- (iii) las providencias que en los procesos policivos aprueben la liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de justicia, y
- (iv) **(iv)** los demás documentos que expresamente disponga la ley.

Respecto al mandamiento ejecutivo, el artículo 430 del CGP establece que: *“presentada la demanda acompañada de documento que preste mérito ejecutivo, el juez librará mandamiento ordenando al demandado que cumpla la obligación en la forma pedida, si fuere procedente, o en la que aquel considere legal”*.

El presupuesto para el ejercicio de la acción ejecutiva **es la existencia formal y material de un documento o conjunto de documentos que contengan los requisitos de título ejecutivo**, de los cuales surja la certeza legal y judicial del derecho del acreedor y la obligación correlativa del deudor.

El título ejecutivo contiene tanto elementos sustanciales como formales. En cuanto a los primeros, se debe verificar si aquél contiene una obligación clara, expresa y exigible al momento de incoarse la demanda. En tal sentido, el Consejo de Estado ha dicho:<sup>9</sup>

1. La obligación es expresa si se encuentra especificada en el título y no es el resultado de una presunción legal o una interpretación normativa.
2. La obligación es clara cuando sus elementos aparecen inequívocamente señalados, sin que exista duda con respecto al objeto o sujetos de la obligación.

4. Las copias auténticas de los actos administrativos con constancia de ejecutoria, en los cuales conste el reconocimiento de un derecho o la existencia de una obligación clara, expresa, y exigible a cargo de la respectiva autoridad administrativa. La autoridad que expida el acto administrativo tendrá el deber de hacer constar que la copia auténtica corresponde al primer ejemplar.

<sup>8</sup> Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

<sup>9</sup> Consejo de Estado, Sección Cuarta, consejera ponente: Dra. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez, auto de 26 de febrero de 2014, radicado: 25000 23 27 000 2011 00178 01 (19250), actor: Clínica del Country S.A. En esta providencia se citó la siguiente doctrina: Velásquez G., Juan Guillermo. *Los procesos ejecutivos*. (2006). Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. Ltda.

3. La obligación es exigible cuando únicamente es ejecutable cuando no depende del cumplimiento de un plazo o condición o cuando dependiendo de ellos ya se han cumplido.

▪ **EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA REGULADO EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO.**

El artículo 305 del Código General del Proceso estipula lo siguiente:

**ARTÍCULO 305. PROCEDENCIA.** *Podrá exigirse la ejecución de las providencias una vez ejecutoriadas o a partir del día siguiente al de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, y cuando contra ellas se haya concedido apelación en el efecto devolutivo.*

*Si en la providencia se fija un plazo para su cumplimiento o para hacer uso de una opción, este solo empezará a correr a partir de la ejecutoria de aquella o de la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso. La condena total o parcial que se haya subordinado a una condición solo podrá ejecutarse una vez demostrado el cumplimiento de esta”.*

Por otra parte, el artículo 306 ibídem dispone:

**“ARTÍCULO 306. EJECUCIÓN.** *Cuando la sentencia condene al pago de una suma de dinero, a la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o al cumplimiento de una obligación de hacer, el acreedor, sin necesidad de formular demanda, deberá solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada. Formulada la solicitud el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia y, de ser el caso, por las costas aprobadas, sin que sea necesario, para iniciar la ejecución, esperar a que se surta el trámite anterior.*

*Si la solicitud de la ejecución se formula dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, o a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior, según fuere el caso, el mandamiento ejecutivo se notificará por estado. De ser formulada con posterioridad, la notificación del mandamiento ejecutivo al ejecutado deberá realizarse personalmente.*

*Cuando la ley autorice imponer en la sentencia condena en abstracto, una vez ejecutoriada la providencia que la concrete, se aplicarán las reglas de los incisos anteriores.*

*Lo previsto en este artículo se aplicará para obtener, ante el mismo juez de conocimiento, el cumplimiento forzado de las sumas que hayan sido liquidadas en el proceso y las obligaciones reconocidas mediante conciliación o transacción aprobadas en el mismo.*



*La jurisdicción competente para conocer de la ejecución del laudo arbitral es la misma que conoce del recurso de anulación, de acuerdo con las normas generales de competencia y trámite de cada jurisdicción”.*

Al interpretar las normas precedentemente citadas, el Consejo de Estado, en sentencia de tutela del 18 de febrero de 2016<sup>10</sup> concluyó lo siguiente:

*(i) Hay un capítulo para la ejecución de las providencias; (ii) No se requiere presentación de demanda, es suficiente elevar el respectivo escrito; (iii) El proceso ejecutivo lo adelanta el juez del conocimiento; (iv) El proceso ordinario y la solicitud no forman expedientes distintos, ya que la solicitud se tramita a continuación y dentro del mismo expediente ordinario, esto es, en cuaderno separado y; (v) el juez librará mandamiento ejecutivo de acuerdo con lo señalado en la parte resolutive de la sentencia.*

También señaló dicha Corporación en la referida providencia que los artículos 305 y 306 del CGP constituyen una clara aplicación del factor de conexidad como determinante de la competencia, puesto que el juez que profiere la condena es el mismo que la ejecuta dentro del mismo expediente, sin necesidad de nueva demanda.

Por otro lado, la Corte Constitucional ha señalado que si bien, en vigencia del Código de Procedimiento Civil, la primera copia de la providencia judicial de condena era presupuesto formal del título ejecutivo, el Código General del Proceso eliminó dicho requisito. Así lo señaló en sentencia T-111/2018:

*“41.- No obstante, el Código General del Proceso eliminó la constancia de primera copia como requisito formal del título cuando se pretende ejecutar una providencia judicial de condena. En particular, el artículo 114 ibídem estableció que “Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria.”*

*En efecto, del tenor literal de la norma vigente se extrae que el fundamento de la ejecución, cuando se pretende el cobro de obligaciones fijadas en providencias judiciales, **lo constituye la copia de la decisión y la constancia de ejecutoria correspondiente sin exigencias adicionales.***

*(...)*

*Entonces, resulta claro que **en vigencia del Código General del Proceso la copia de las providencias que se pretenden utilizar como título ejecutivo solo requiere la constancia de ejecutoria.** Esta tesis se sustenta en: (i) el tenor literal del artículo 114 ibídem; (ii) los principios que irradian la nueva codificación civil, entre los que se encuentra la celeridad de los trámites y la consecuente eliminación de formalidades, y (iii) el acceso a la administración de justicia”.*

En el mismo sentido, el Consejo de estado, en recientes pronunciamientos, ha sido enfático en señalar que las sentencias aportadas a la demanda dentro del proceso

---

<sup>10</sup> Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A – sentencia del 18 de febrero de 2016 – Consejero Ponente WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ – radicación nro. 11001-03-15-000-2016-00153-00 (AC).

ejecutivo se presumen auténticas. En sentencia del 25 de octubre de 2019, dicha Corporación afirmó lo siguiente:

*“(…)De acuerdo con los apartes citados en el párrafo anterior, no es obligatorio que los documentos que componen el título, deban ser auténticos. Ahora, cuando se trata de una sentencia proferida por los jueces administrativos<sup>11</sup>, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la misma.*

*(…)*

**Por todo lo expuesto, y en virtud del principio de economía procesal, es claro que cuando se trate de un título ejecutivo que esté conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo y de las cuales surge la obligación clara, expresa y exigible, como en el caso bajo estudio, se deben presumir auténticas las copias que aporten los demandantes**<sup>12</sup>.(Negrita y subrayas fuera del texto)

Igualmente, en providencia del 20 de febrero de 2020, el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo sostuvo:

*“Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que la accionante en su escrito de tutela, señala que la autoridad accionada incurrió en defecto fáctico y procedimental por exceso ritual manifiesto, al concluir que las copias simples de las sentencias que fueron aportadas al proceso no constituyen título ejecutivo y solicitar la sentencia con la constancia de ser la primera copia que presta mérito ejecutivo, es necesario recordar que esta Sala de Subsección en reiteradas oportunidades, ha sostenido lo siguiente:*

*« (...) los artículos 305 y 306 del CGP constituyen una clara aplicación del factor de conexidad como determinante de la competencia, pues tal y como lo prevé dicha norma, el juez que profiere una sentencia de condena es el mismo que la ejecuta a continuación y dentro del mismo expediente en que fue dictada, sin necesidad de una nueva demanda.*

*La claridad y seguridad que brinda al usuario de la justicia la adopción del criterio de competencia por el factor de conexidad, tiene mayor relevancia si se observa la práctica forjada en algunas sendas judiciales, de las cuales no ha sido ajena esta misma Corporación, consistente en que por diversos motivos, en las providencias, no se profieren condenas precisas y en concreto.*

*Bajo tal perspectiva, en nada influye dentro del proceso ejecutivo que las mencionadas resoluciones hubiesen sido aportadas en copia simple y en esa medida, al Tribunal correspondía librar mandamiento de pago, puesto que el título ejecutivo estaba conformado por las sentencias que prestan*

<sup>11</sup>Concepto general que incluye los jueces, tribunales y el Consejo de Estado.

<sup>12</sup> Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A – sentencia del 25 de octubre de 2019 – Consejero Ponente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ – radicación nro. 13001-23-33-000-2019-00409-01 (AC).

*mérito ejecutivo de las cuales surgió la obligación clara, expresa y exigible a cargo de la entidad<sup>13</sup>.»*  
(...)

*De acuerdo con los apartes citados en el párrafo anterior, no es obligatorio que los documentos que componen el título ejecutivo, deban ser auténticos. Ahora, cuando se trata de una sentencia proferida por los jueces administrativos<sup>14</sup>, una vez ejecutoriada, constituye por sí sola el título ejecutivo idóneo para solicitar la ejecución de la misma.*

*En ese sentido, y en virtud del principio de economía procesal, es claro que cuando se trate de un título ejecutivo que esté conformado por las sentencias que prestan mérito ejecutivo y de las cuales surge la obligación clara, expresa y exigible, como en el caso bajo estudio, se deben presumir auténticas las copias que aporten los demandantes<sup>15</sup>”.*

Conforme a los pronunciamientos jurisprudenciales precedentemente expuestos, se concluye entonces que cuando se pretende la ejecución de una sentencia ante esta jurisdicción, no hace parte de los requisitos formales de la procedencia del mandamiento de pago la presentación de copia auténtica de la providencia cuyo cumplimiento se pretende.

### **CASO CONCRETO:**

De conformidad con el artículo 328<sup>16</sup> del C.G.P, aplicable por remisión expresa del artículo 306<sup>17</sup> del CPACA, se procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte ejecutante, pronunciándose solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso interpuesto.

Recapitulando, se tiene entonces que la parte actora solicita se libre mandamiento de pago por la suma de \$16.690.056,46, por concepto de capital insoluto, correspondiente a intereses moratorios, derivado de lo ordenado pagar a través de la sentencia de primera instancia del 30 de abril de 2013<sup>18</sup>, emanada del Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Buga, confirmada

---

<sup>13</sup> Fallo de la Sección Segunda de esta corporación del 3 de agosto de 2017 con ponencia del Dr. William Hernández Gómez, expediente 11001-03-15-000-2017-01577-00.

<sup>14</sup> Concepto general que incluye los jueces, tribunales y el Consejo de Estado.

<sup>15</sup> Consejo de Estado – Sección segunda – Subsección A – sentencia del 20 de febrero de 2020 – Consejero Ponente GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ, radicación nro. 11001-03-15-000-2019-04424-01 (AC)

<sup>16</sup> ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.

<sup>17</sup> ARTÍCULO 306. ASPECTOS NO REGULADOS. En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

<sup>18</sup> Folios 11-26.



por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 11 de mayo de 2015<sup>19</sup>.

El Juez de primera instancia rechazó la demanda, por cuanto la parte actora, pese a haber sido requerida a través de auto inadmisorio, no aportó copia auténtica de la sentencia objeto de ejecución; requisito, que, según su criterio, es indispensable en el presente caso, comoquiera que la demanda ejecutiva no se presentó a continuación del proceso ordinario que dio lugar a la providencia a ejecutar.

Por su parte, la apoderada judicial de la parte actora impugnó dicha decisión, por considerar que el proceso ejecutivo sí fue iniciado a continuación del proceso ordinario y, en esa medida, la copia auténtica de la sentencia no es un requisito de procedencia del mandamiento de pago.

Pues bien, conforme a la normatividad y jurisprudencia precedentemente citadas, queda claro que no hace parte de los requisitos formales de procedencia del mandamiento de pago que se aporte con la solicitud de ejecución la copia auténtica de la providencia a ejecutar. Si bien es cierto que la sentencia objeto de ejecución fue proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Buga, despacho que fue suprimido; también lo es que, tal como lo señala la parte actora en su escrito de apelación, es el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Guadalajara de Buga el que se encuentra a cargo del expediente, pues, por tal razón, asumió el conocimiento de la demanda de la referencia. En esa medida, resulta demasiado gravoso exigirle a la parte demandante que aporte copia auténtica de la providencia cuyo cumplimiento pretende, cuando ese Despacho está en la obligación de efectuar el desarchivo del expediente que contiene dicha sentencia para, a continuación de este, dar trámite a la solicitud de ejecución.

Por otra parte, en materia de ejecución cuyo título sea una sentencia judicial el Consejo de Estado ha sostenido que esta por sí misma constituye título ejecutivo sin que sea necesario aportar el acto administrativo que la ejecute, en esa medida toda exigencia adicional a ello, como liquidaciones u otros constituye excesivo ritual manifiesto, aspectos que son del resorte de etapas posteriores.

Así las cosas, este juzgador dispondrá revocar la decisión de rechazar la demanda, tomada por el juez de primera instancia, para que, en su lugar, proceda a efectuar el análisis de procedencia del mandamiento de pago, limitándose a estudiar lo pertinente respecto al cumplimiento de los requisitos legales de forma y de fondo del título ejecutivo.

En mérito de lo expuesto, se

### **R E S U E L V E:**

**PRIMERO.- REVOCAR** el auto interlocutorio No. 767 del 5 de agosto de 2019, proferido por el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Guadalajara de Buga que rechazó la demanda, de conformidad con la parte motiva de esta providencia

**SEGUNDO: DEVUÉLVASE** al Juzgado de Origen, cancélense su radicación y sin costas en esta instancia<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Folios 27-37.

<sup>20</sup> Proyectó: ACH



Aprobada en Sala y Acta de la fecha.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**Los Magistrados**

**JHON ERICK CHAVES BRAVO**

**FERNANDO AUGUSTO GARCIA MUÑOZ**

**RONALD OTTO CEDEÑO BLUME.**